

entrevista

Ignacio Fernández Toxo/ Secretario General de CCOO

“Habrá huelga si el Gobierno legisla contra los derechos de los trabajadores”

por Jaime Fernández

Ignacio Fernández Toxo (Ferrol, 1952) es secretario general de CCOO desde que fuese elegido en el 9º congreso que el sindicato celebró en Madrid el pasado mes de diciembre. En noviembre 1987 se convirtió en secretario general de la Federación del Metal hasta mayo de 2004, cuando entró a formar parte del Consejo Confederal del sindicato, máximo órgano entre congresos. En abril de 2004 y en el marco del 8º Congreso Confederal se incorporó a la Comisión Ejecutiva de CCOO como secretario de Acción Sindical y Políticas Sectoriales.

Tras la huelga en el sector público del pasado 8 de junio, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, advierte que si, a falta de un acuerdo en la Mesa de reforma del mercado de trabajo, el Gobierno legislase por decreto contra los derechos de los trabajadores, habrá huelga general, tal como acordó el Consejo Confederal de la central sindical el 27 de mayo.

¿En qué medida las crisis económica en España está influida por la crisis financiera internacional?

Después de la quiebra del sistema financiero estadounidense provocado por la emisión fraudulenta de los bancos de inversión de activos financieros por valor de billones de dólares, y la posterior extensión al consumo y la producción mundial, todos los analistas coincidieron en que tan sólo la decidida y masiva intervención del sector público evitó el riesgo sistémico y el colapso de la intermediación financiera. Una intervención que, sin embargo, no evitó una rápida y abrupta recesión económica en la mayor parte del mundo.

Fueron tiempos de políticas públicas y manual keynesiano. De dignos amagos sobre la supremacía de la democracia y de la política. Pero fue un espejismo. Aquellos que reclamaron un paréntesis al capitalismo y que esperaron agazapados hasta que escampara; los que provocaron el desastre y vivieron aparentemente bajo el signo del descrédito social; los ideólogos del capitalismo de casino, que parecen no tener rostro; todos ellos han emergido de nuevo y han puesto a los gobiernos a sus pies, recetando mercado y agitando convulsiones monetarias. El Gobierno español ha sido uno de ellos.

¿Qué opina de la reacción del Gobierno ante esta situación?

Incapaz de prever la dimensión de la crisis, el Gobierno fue aceptando su gravedad a medida que improvisaba un paquete tras otro de medidas de corto alcance y escasa o nula coordinación. Sumó

a su insolvencia una acusada ausencia de liderazgo que, en tiempos de recesión, se nos antojaba imprescindible para convocar a las fuerzas políticas y sociales y explorar la posibilidad de un Pacto de Estado. En su lugar se fueron sucediendo acuerdos de baja intensidad y alta disputa mediática, siempre activados por un Partido Popular cegado por el horizonte electoral.

Las medidas contempladas en el plan nos parecen injustas porque afectan a alguno de los sectores más débiles de la sociedad

¿Cuál ha sido el papel de la Unión Europea en estas turbulencias económicas?

No faltó en este festival de despropósitos, la Unión Europea ha estado más atenta a los vaivenes de los mercados, que a la necesidad de preservar la Unión Política y Monetaria. De la primera, mejor no hablar; y de la segunda, sólo cabe hablar de decepción y fracaso. Una decepción que deriva en irresponsabilidad cuando se trata de hacer frente a situaciones de grave crisis económica y financiera como la de Grecia, a la que se atendió tarde y mal, sometiéndola a la dictadura de los mercados financieros.

¿Qué le parece el plan de ajuste aprobado por el Ejecutivo?

Se trata de un plan para reducir el déficit público en 15.000 millones de euros hasta 2011, a rebufo de los mercados, de la Unión Europea y de los dictados del Fondo Monetario Internacional. Estamos ante un nuevo paquete de medidas, pero esta vez, con un objetivo claro y unas víctimas definidas. El objetivo es reducir el déficit público, recortando drásticamente el gasto social; las víctimas: pensionistas, empleados públicos y personas dependientes. En unos días, el Gobierno cambió el rumbo e interpretó de la forma más ortodoxa las recetas del liberalismo económico: menos estado de bienestar y más confianza en los mercados, es decir, más sacrificio para los de siempre.

¿Y en cuanto a las medidas concretas?

Las medidas contempladas en el plan nos parecen injustas porque afectan a alguno de los sectores más débiles de la sociedad, desequilibradas, ya que se opta por reducir el gasto abandonando cualquier iniciativa para aumentar los ingresos y antieconómicas, por cuanto que reducen la capacidad de compra de pensionistas y empleados públicos lo que provocará un descenso del consumo y un freno a la reactivación. Además quiebran la legitimidad del diálogo social, es decir, el consenso parlamentario y social derivado del Pacto de Toledo y de los acuerdos con los empleados públicos saltan por los aires, y contaminan la negociación colectiva en el sector privado. Por ejemplo, en numerosos convenios los empresarios han roto compromisos salariales anteriores.

¿Ve posible la convocatoria de una huelga general?

En coherencia con el análisis que nos merece el plan de ajuste, los sindicatos acordamos una huelga general en las administraciones públicas para el 8 de junio, y advertimos al Gobierno que de seguir por el camino del recorte del gasto social, vulnerando derechos sociales y laborales, quedan abiertos todos los escenarios de movilización social, incluida la huelga general. Concretaría más. Si junto al plan de ajuste, y en ausencia de acuerdo en la Mesa de reforma del mercado de trabajo, el Gobierno legisla por decreto contra los derechos de los trabajadores, habrá huelga general, según acordó nuestro Consejo Confederal de Comisiones Obreras reunido el pasado 27 de mayo.

No podemos tolerar que la destrucción de empleo que se acerca ya a los 4,7 millones de parados y el ataque al estado de bienestar, cuyo origen hay que buscarlo en las políticas especulativas y la crisis del sistema financiero, se agiten como la “única posibilidad de superar la grave crisis por la que atraviesa la economía española”.

¿Hay otra forma de hacer las cosas?

Sí, lo hemos repetido hasta la saciedad. Se puede y se debe reformar el sistema financiero, para que fluya el crédito a familias y empresas; hay que recuperar figuras tributarias alegremente eliminadas, como el impuesto de patrimonio y de sucesiones, modificar el impuesto de sociedades y abordar de una vez por todas el debate para una nueva fiscalidad, más ambiciosa y equitativa; se tiene que precisar un plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, que permita cuantificar anualmente los ingresos obtenidos.

“El plan de ajuste no es la única salida”

¿Existen otras alternativas al plan de ajuste?

Desde luego el plan de ajuste no es la única salida. O somos capaces de compartir sacrificios para superar la delicada situación económica, y trabajamos por un acuerdo de todos, en el que el Gobierno se implique con decisión y firmeza, o entraremos en tiempos de creciente y sostenida movilización general contra las medidas injustas y antieconómicas que ha aprobado el Gobierno.